Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid

C/ Gran Vía, 19 , Planta 3 - 28013

45029730

Procedimiento Ordinario 558/2018

Demandante/s: D./Dña.

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON
LETRADO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL

SENTENCIA Nº 311/2019

En Madrid, a 22 de noviembre de 2019.

Visto por mí, Ilmo. Sr. Don, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid, el recurso contencioso-administrativo registrado con el número **558/2018** seguidos por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, sobre SEGURIDAD E HIGIENE, contra la inactividad de la administración.

Son partes en dicho recurso, como demandante Doña representada y dirigida por Don; como demandada el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, representado y dirigido por Don.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de la citada recurrente se interpuso por el procedimiento ordinario recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la administración en relación con la situación de abandono y malas condiciones higiénicas de la finca sita en

Admitido el recurso a trámite, se procedió a reclamar el expediente administrativo que, una vez recibido, se puso de manifiesto a la parte recurrente para que formalizase la demanda dentro del correspondiente plazo, lo que verificó mediante un escrito en el que expuso los hechos y alegó los fundamentos de derecho que estimó oportunos.

SEGUNDO.- La representación procesal del Ayuntamiento de Pozuelo demandado se opuso a la demanda solicitando que se dictase una sentencia por la que se desestime el recurso en todos sus pedimentos.

TERCERO.- En las presentes actuaciones se solicitó por las partes el recibimiento del recurso a prueba, quedando incorporadas al rollo procesal tras su práctica.

CUARTO.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado los preceptos y prescripciones legales en vigor. Mediante Decreto del Juzgado de 25 de septiembre de 2019 quedó fijada la cuantía del recurso en indeterminada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la inactividad de la administración municipal por la contestación de 2 de febrero de 2018 de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo, en la que se declara que no existe estado de abandono.

SEGUNDO.- La demandante interesa se dicte una Sentencia por la que se estime el recurso contencioso administrativo interpuesto y se condene al ayuntamiento demandado a cumplir las obligaciones. Se fundamenta en que por la Gerencia de Urbanismo se dictó resolución el 24 de mayo de 2017 por la que se ordenaba al propietario que procediera a garantizar las condiciones de higiene, ornato público y decoro. También el 26 de mayo de 2018 el Técnico de salud pública en un informe pone de manifiesto la situación de deterioro.

Por su parte, la Administración municipal demandada, oponiéndose a la demanda, solicita la inadmisibilidad y subsidiariamente la desestimación del recurso interpuesto por entender que la actuación impugnada es plenamente ajustada a Derecho. Fundamenta su contestación en que el recurso se interpone tras haber caducado la acción, pues la reclamación previa se presentó el 21 del 12 de 2017 y la demanda se presenta en abril de 2019, por lo que la actividad impugnada no es susceptible de impugnación según el art. 51.1.c y d) LJCA. También se opone una falta de legitimación activa y en cuanto al fondo, sostiene el letrado consistorial que no existe inactividad administrativa.

TERCERO.- El artículo 18 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril) dispone que son derechos de los vecinos, entre otros, el *de “g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.”*, por su parte, entre las competencias de los municipios, recogidos en el art. 25 de la misma ley se encuentran, el urbanismo, el medio ambiente, prevención y protección de incendios, protección de la salubridad pública. Dichas competencias no son negadas por las partes, como no puede ser de otra forma.

La cuestión que aquí se plantea se reduce a determinar la forma como ha de cumplir el ayuntamiento de Pozuelo dichas competencias en el presente caso, o dicho más directamente, si existe un derecho a la prestación del servicio que se reclama por la recurrente. Hemos de contestar inmediatamente de forma afirmativa.

Frente a negación de existencia de las malas condiciones higiénicas, se deben citar los informes de los Técnicos de Salud Pública, en particular el de 17 de mayo de 2017, que obra al folio 40 y ss:

“5. De la inspección ocular se infiere que la vivienda se encuentra, al menos en el exterior, en estado de semiabandono y en malas condiciones higiénico-sanitarias. La vegetación, la existencia de agua y comida para el perro en la rampa del garaje y el acumulo de enseres pueden facilitar y favorecer la proliferación de plagas de roedores y/o insectos los cuales, son vectores de transmisión de enfermedades, algunas de ellas muy graves, tanto víricas como bacterianas que pueden afectar no

sólo a los humanos de forma directa, sino también a los animales domésticos que pueden a su vez convertirse en un vector de infección para el hombre. La infestación de una zona por estos animales puede llegar a suponer un grave problema de Salud Pública.

Se adjuntan fotografías tomas en varias de las visitas realizadas”

Es evidente que existe una contradicción entre el citado informe del Técnico de Salud Pública de 17 de mayo de 2017 y la notificación de 2 de febrero de 2018 de la Gerencia Municipal de Urbanismo **(que aparece en el expediente, por cierto, sin firmar)**.

CUARTO.- En este caso, las denuncias se remontan al año 2014 y está constatado que existen razones de higiene, ornato y decoro para actuar desde la administración, incluso con resolución administrativa expresa que así lo determina, pero lo cierto es que el ayuntamiento de Pozuelo no ha demostrado un empeño o celo en cumplir con sus obligaciones, así como en ejecutar su propia orden de ejecución de 24 de mayo de 2017.

El representante legal del consistorio opone a la demanda razones formales que debemos rechazar. En primer lugar, se considera caducada la acción del art. 29.2 LRJCA, sin embargo, la demanda no se formaliza al amparo del art. 29.2, sino contra una comunicación del ayuntamiento (de 2 de febrero de 2018) en la que se niega el estado de abandono de la parcela y no se formaliza el recurso por el procedimiento abreviado como exige la Ley, sino por el procedimiento ordinario. Además, dicha comunicación viene a contradecir la orden de 24 de mayo de 2017 (folio 31 y ss), que no parece haber sido ejecutada.

Es importante recordar que la exposición de motivos de la Ley 29/1998 amplía el ámbito de control jurisdiccional de la administración:

“Lo que realmente importa y lo que justifica la existencia de la propia Jurisdicción Contencioso-administrativa es asegurar, en beneficio de los interesados y del interés general, el exacto sometimiento de la Administración al derecho en todas las actuaciones que realiza en su condición de poder público y en uso de las prerrogativas que como tal le corresponde. No toda la actuación administrativa, como es notorio, se expresa a través de reglamentos, actos administrativos o contratos públicos, sino que **la actividad prestacional**, las actividades negociables de diverso tipo, las actuaciones materiales, las **inactividades u omisiones de actuaciones debidas expresan también la voluntad de la Administración, que ha de estar sometida en todo caso al imperio de la ley**. La imposibilidad legal de controlar mediante los recursos contencioso-administrativos estas otras manifestaciones de la acción administrativa, desde hace tiempo criticada, resulta ya injustificable, tanto a la luz de los principios constitucionales como en virtud de la crecida importancia cuantitativa y cualitativa de tales manifestaciones.”

El letrado del ayuntamiento pretende haberse caducado la acción para reclamar la actuación administrativa por no haberla ejercido en plazo, pero lo cierto es que no existe plazo para demandar y exigir a la administración el cumplimiento de una obligación legal. Afirma también el letrado que no existe inactividad administrativa porque el expediente está en tramitación, dicha afirmación debe ser rechazada de plano, pues debemos insistir en que la resolución u orden de ejecución es de fecha 24 de mayo de 2017, sin que conste su

cumplimiento o actuaciones encaminadas a dar cumplimiento, habiendo informes técnicos posteriores que evidencian el incumplimiento y prueban la inactividad del ayuntamiento.

El *petitum* de la demanda se concreta en que se ordene a la administración el cumplimiento de sus obligaciones y la condena en costas. Debemos proceder en consecuencia a declarar el deber de la administración municipal de, previa inspección de la parcela denunciada, proceder con base en las competencias y obligaciones legales arriba citadas, a dar cumplimiento a su propia resolución de 24 de mayo de 2017, y a restituir el estado de la referida parcela a condiciones de higiene y ornato adecuadas.

QUINTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, procede imponer las costas a la administración, pero atendiendo al objeto del recurso y su cuantía, así como al esfuerzo desarrollado por los letrados se limitan los honorarios del letrado municipal en 200 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que, emanada del pueblo español, me concede la Constitución.

FALLO

Que, estimando el recurso contencioso-administrativo ordinario número 558/2018 interpuesto por la representación procesal de contra la inactividad del ayuntamiento de Pozuelo, ordenamos se proceda a dar cumplimiento y ejecución de la Orden de 24 de mayo de 2017 del gerente Municipal de Urbanismo, previa comprobación del estado de la finca en . Todo ello con condena a las costas del recurso a la administración, con el límite fijado en el Fundamento Quinto.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de **APELACIÓN** en el plazo de **QUINCE DIAS** a contar desde el siguiente a su notificación, advirtiéndoles que deberá constituir depósito de **50 euros**. Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado nº, especificando en el campo **concepto** del documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 22 Contencioso-Apelación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio), lo que deberá ser acreditado al presentarse escrito de interposición del recurso, bajo el apercibimiento de que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido y que de no efectuarlo se dictará auto que pondrá fin al trámite del recurso.

Así lo acuerda, manda y firma el el/la Ilmo/a Sr/a. D./Dña. Magistrado/a-Juez/a del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de los de Madrid.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.